brero de 2009, en cuyo relato fáctico se hace constar que el establecimiento «BUDA STAR, S.C.», cuyo titular es «BUDA STAR, S.C.» - sito en calle Valliciergo, número 3 bajo, de Santander y con categoría «D» - se encontraba abierto al público en la fecha y hora siguiente: 8 de febrero de 2009, a las 3:33 horas, con 8 clientes en su interior y teniendo en cuenta que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de una infracción al régimen de horarios establecido en el artículo 4 del Decreto 72/1997, de 7 de julio («Boletín Oficial de Cantabria» número 146, de 23 de julio de 1997), por el que se establece el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos y actividades recreativas, y considerando:

Primero.- Que la infracción imputada se tipifica como leve en el artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero («Boletín Oficial del Estado» número 46, de 22 de febrero) de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Segundo.- Que, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 28.1- a) de la precitada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, las infracciones cometidas pueden ser sancionadas con multa de hasta 300,51 euros.

Tercero.- Que, conforme establece el artículo 10 del Decreto 72/1997, de 7 de julio, compete a esta Secretaría General imponer las sanciones por la comisión de infracciones leves.

Por todo ello, y en mérito a los antecedentes y fundamentos expuestos, esta Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8 del citado Decreto 72/1997, de 7 de julio, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189, de 9 de agosto), que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora

ACUERDA

1º.- Incoar procedimiento sancionador a «BUDA STAR, S.C.», en su condición de titular del establecimiento «BUDA STAR, S.C.» como presunto responsable de la comisión de una infracción al régimen de horarios establecido en el artículo 4 del Decreto 72/1997, de 7 de julio, tipificada como leve en el artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, pudiendo el interesado aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del presente Acuerdo, así como examinar el expediente y obtener copia de los documentos obrantes en el mismo en la Sección de Juego y Espectáculos – dentro del citado plazo, y en horario de 9:00 a 14:00 horas – ubicada en la calle Peña Herbosa, número 29 de esta ciudad de Santander, con la advertencia de que – transcurrido el citado plazo sin que el interesado haya realizado sus alegaciones frente a este Acuerdo de iniciación – el mismo podrá ser considerado como propuesta de resolución, y sin perjuicio del derecho que le asiste al presunto responsable para reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso el procedimiento se resolverá con la imposición de la sanción que proceda, quedando a salvo la posibilidad de interponer frente a la misma los recursos pertinentes.

2º.- Nombrar como Instructor del procedimiento a don David Abascal Fernández, y como secretaria del mismo a doña Carmen Fernández González, los cuales podrán ser recusados por el interesado en los términos prevenidos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cumplase el presente Acuerdo y notifíquese al Instructor, al presunto responsable y al denunciante.

A partir de la publicación del presente anuncio queda abierto un período de quince días, durante el cual el interesado podrá examinar el expediente en la Sección de Juego y Espectáculos, calle Peña Herbosa, 29 de Santander, a los efectos de que pueda formular las alegaciones que estime convenientes.

Transcurrido el período citado sin que se hayan presentado alegaciones, al contenido de esta providencia de iniciación, la misma podrá ser considerada como propuesta de resolución.”

Santander, 6 de abril de 2009.–La secretaria general, Jezabel Morán Lamadrid.

09/5681

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Urbanismo

Notificación de la incoación y el pliego de cargos del expediente sancionador número 02/09 SC.

No habiéndose podido notificar a DON JUAN CARLOS SANTOS BLANCO, la incoación y el pliego de cargos que a continuación se reproduce, tras haberse intentado a través del Servicio de Correos y Telégrafos, se procede a la publicación del presente anuncio al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«ASUNTO: INCOACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR A DON JUAN CARLOS SANTOS BLANCO.

Como consecuencia de la comunicación remitida por la Demarcación de Costas de Cantabria, con referencia D.SP-11/06, ha sido advertida la comisión de una infracción, consistente en la realización de obras de excavación y explanación de un terreno para construcción de vivienda a menos de 100 metros de la zona marítimo-terrestre, en zona de servidumbre de protección, en La Maruca, término municipal de Santander.

Que los hechos precedentemente expuestos, pueden ser constitutivos de infracción administrativa, tipificada como grave en el artículo 91.2.g) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en relación con el artículo 175.2.g) de su Reglamento General.

Por lo que, vistas las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del POL, en la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas aprobado por Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre y artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,

ACUERDO

PRIMERO.- Incoar el expediente sancionador número 02/09 SC contra DON JUAN CARLOS SANTOS BLANCO, para determinar las infracciones en que hubiera podido incurrir, y la aplicación, en su caso, de las sanciones que procedan, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio, y el 192 y siguientes de su Reglamento General.

SEGUNDO.- Nombrar instructor a DON RAFAEL RODRÍGUEZ HOYO y secretaria a DOÑA M^a OLGA MALAGÓN BARRIO. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá promoverse su recusación por los interesados, en cualquier momento del procedimiento, si concurren las causas expresamente enumeradas en el artículo 28 de dicho texto legal.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.b) de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre del POL, en relación con el artículo 13.1 d) del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y con el artículo 102 de la Ley de Costas, el órgano competente para resolver el presente procedimiento será el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, para sanciones de hasta 60.000,- euros, y el Gobierno de Cantabria, cuando excedan de la cuantía precitada. No obstante, por Resolución de 22 de diciembre de 2004, el ejercicio de la referida competencia queda delegada en el director general de Urbanismo.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 103.1 de la Ley 22/1988 y el artículo 194.1 del Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, al objeto de evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, se acuerda la inmediata PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS INDICADAS. Si dicha paralización fuera desatendida, se procederá al precinto o retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a las mismas, pudiendo recuperar el interesado los materiales retirados, previo abono de los gastos de transporte y custodia. Para la efectividad de la paralización, el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de la fuerza pública.

QUINTO.- Si el inculpado reconoce su culpabilidad, se podrá resolver el expediente con la imposición de la sanción que proceda, ello según lo que establece el artículo 13.1.d) en relación con el 8 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Asimismo se considerará como CIRCUNSTANCIA ATENUANTE, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo de DIEZ (10) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Reglamento General para su desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.

SEXTO.- Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el infractor estará obligado a la RESTITUCIÓN DE LAS COSAS Y REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que se fije en la resolución del presente procedimiento.

SÉPTIMO.- El plazo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de DOCE (12) MESES, desde la fecha del presente acuerdo de incoación. Transcurrido dicho plazo sin que hubiese recaído resolución expresa se producirá la caducidad del presente procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común «podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarle para su definición y esclarecimiento».

Frente a la medida provisional adoptada de paralización de las obras cabe interponer en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de esta notificación, recurso de alzada ante el Gobierno de Cantabria.

Santander, 3 de marzo de 2009.-El director general de Urbanismo, «POR DELEGACIÓN», (Resolución de 22 de diciembre de 2004. BOC 24 de enero de 2005.), Pedro Gómez Portilla.

ASUNTO: PLIEGO DE CARGOS DEL EXPEDIENTE
SANCIONADOR NÚMERO 02/09 SC POR ACTUACIONES
EN LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE.

Que como consecuencia del expediente sancionador número 02/09 SC-incoado según documento adjunto-, se formula frente a DON JUAN CARLOS SANTOS BLANCO, el siguiente pliego de cargos, conforme a lo regulado en el ar-

tículo 194.7 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, frente a los cuales, de conformidad con el apartado 1 del artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados dispondrán de un plazo de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del presente pliego, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenden valerse. En el supuesto de no formular alegaciones en el plazo indicado, aquél se considerará propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del referido Real Decreto de Procedimiento Sancionador.

HECHOS IMPUTADOS

Realización de obras de excavación y explanación para construcción de vivienda a menos de 100 metros de la zona marítimo-terrestre, en zona de servidumbre de protección.

PRECEPTOS INFRINGIDOS

Infracción del artículo 91.2.g) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación con el artículo 175.2.g) del Reglamento para su desarrollo y ejecución tipificada como grave.

LUGAR

La Maruca, término municipal de Santander.

IMPORTE DE LA SANCIÓN

Multa de hasta 300.506,05,- euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.a) de la Ley de Costas en relación con el artículo 183 a) del Reglamento para su desarrollo y ejecución.

OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN

El artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio dispone que «Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.

Santander, 3 de marzo de 2009.-El instructor, Rafael Rodríguez Hoyo.

09/5184

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Biodiversidad

Notificación de propuesta de resolución en expediente de denuncia número M-145/08.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la propuesta de resolución correspondiente al expediente de denuncia que se cita, se hace público el presente anuncio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Identificación del expediente: M-145/08.
Nombre y Apellidos: don Emilio Sebrango Puente.
Domicilio: Los Llanos. Camaleño.
NIF: 13901443.